

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-021-2016-01088-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, causación, principio de la condición más beneficiosa.
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintiunos (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 022**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 7 de octubre de 2019, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que los señores MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS y ARTURO BALLESTEROS OSPINA contrajeron matrimonio el día 26 de junio de 1965, sin separarse en ningún momento hasta el momento de la muerte de este último quien falleció el 25 de mayo de 2003 por causa común.

Que el señor ARTURO BALLESTEROS OSPINA fue afiliado al entonces Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones) desde el 1º de enero de 1967 y alcanzó a reunir con anterioridad al 1º de abril de 1994 una densidad de 547,71 semanas cotizadas.

La demandante se presentó a COLPENSIONES el día 22 de diciembre de 2015 a reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y la entidad le negó la misma a través de la Resolución GNR 44847 de 2016, por no haber dejado el causante 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, o 26 en el último año, imposibilitándose la aplicación de la condición más beneficiosa. Adujo que posteriormente reclamó a Colpensiones la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue reconocida en cuantía de \$3.801.331 a través de la Resolución GNR 119840 del 25 de abril de 2016.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al

reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de la demandante MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS, en calidad de cónyuge supérstite del afiliado fallecido ARTURO BALLESTEROS OSPINA, en forma retroactiva a partir del 25 de mayo de 2003, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, y las costas del proceso, así como lo ultra y extra petita que se encuentre probado.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES a través de su apoderado judicial dio respuesta oportuna a la demanda (fls. 41 y ss.) manifestó frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden al fallecimiento del afiliado BALLESTEROS OSPINA, la existencia de vínculo matrimonial con la aquí demandante, así como la solicitud pensional y la negativa dada a la misma a través de la resolución N° GNR-44847 de 2016, y el posterior reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a través de acto administrativo posterior. Indicó que los demás hechos no le constan; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“IMPROCEDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS E INTERESES MORATORIOS DE MANERA SIMULTÁNEA y PRESCRIPCIÓN”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la juez A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 7 de octubre de 2019, **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS, a quien le fueron impuestas las costas del proceso en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma de \$300.000.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que en el presente caso no se dan los presupuestos para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo los lineamientos jurisprudenciales de la sentencia SU 005 de 2018 de la Corte Constitucional; conclusión a la que llegó luego de revisar uno a uno los 5 elementos que exige el test de procedencia constitucional y dar cuenta de una duda general respecto a muchos aspectos improbados que le impedían constatar la verificación de estas exigencias.

Además de lo anterior y abstrayéndose un poco del propio test, encontró que la muerte de la demandante ocurrida en el curso del proceso el 18 de febrero de 2018, se erigía en una circunstancia fáctica que hacía desaparecer los criterios que permitirían establecer su derecho a esta pensión, a efecto de lo cual planteó el interrogante de si finalmente resultaba procedente la prestación en aras de salvaguardar la subsistencia y supuesta vulnerabilidad de una persona que por sustracción de existencia ya no sería beneficiaria del disfrute de la misma.

De esta manera concluyó que no resultaba siquiera procedente realizar el test de procedencia establecido en la citada providencia de unificación.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El apoderado judicial de la demandante, indica en su alzada que el afiliado ARTURO BALLESTEROS OSPINA, sí dejó causada una pensión de sobrevivientes al reunir la densidad de cotizaciones exigida en el Decreto 758 de 1990, lo anterior, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Partiendo de hacer énfasis en que el causante falleció el 25 de mayo de 2003, pocos meses después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, subrayó que existía imposibilidad jurídica y fáctica de que el causante hubiere dejado cotizadas las 50 semanas a esta vigencia. Soportó esta postura indicando que el causante se encontraba en circunstancias que le imposibilitaban cotizar, como su avanzada edad, su imposibilidad de conseguir empleo en el campo y las reglas de la experiencia que a su juicio indican que

los empleadores de personas dedicadas al trabajo en el campo no eran usualmente afiliadas a la seguridad social.

Estimó satisfecho a cabalidad en este caso concreto el test de procedibilidad establecido por la Corte acudiendo al principio de libertad probatoria en esta materia para enarbolar que por cualquier medio de prueba se hace pertinente evidenciar que en este caso sí se cumple, siendo la prueba testimonial claro medio de convicción para constar estas circunstancias fácticas. Al efecto destacó que se cumplían uno a uno los presupuestos constitucionales, en tanto para el momento de la muerte del causante la demandante se encontraba en estado de vejez, era una persona en extrema pobreza que dependía económicamente de su esposo, se encontraba en enfermedad y sus necesidades básicas y vida en condiciones dignas se afectaron con el deceso de su cónyuge.

Expresó que también fue debidamente agotada la reclamación administrativa ante la entidad, merced a la cual se le pagó una indemnización sustitutiva de la pensión reclamada, dándose por cumplido el requisito de su condición de beneficiaria.

Adujo, con relación al argumento de la muerte de la demandante que llevó al A quo a estimar sustracción de materia frente al test, que los hechos no prescriben, que si la demandante se llegó a encontrar en vida en circunstancias que denotaban el cumplimiento de situación de vulnerabilidad, los derechos generados a partir de esa condición debían serle reconocidos incluso post mortem, con destino a su masa herencial.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el Dr. Roque Alexis Ortega Correa, con TP. Nro. 209.067 del CSJ como apoderado judicial sustituto de Colpensiones, conforme a la documentación allegada presentó alegatos de conclusión.

Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente para representar los intereses de la entidad en la calidad anotada.

A través de dichos alegatos destacó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes que se le hizo a la demandante, a efectos de lo cual citó el artículo 128 constitucional, del cual se deriva la imposibilidad de que un ciudadano perciba una doble asignación del tesoro público, en este caso pensión e indemnización sustitutiva. También hizo hincapié en el hecho de que las semanas tenidas en cuenta para reconocer una indemnización sustitutiva no se pueden emplear para el reconocimiento de una pensión.

Agregó que, revisada la historia laboral del causante se advierte que cuenta con idéntico número de semanas a las que fueron tenidas en cuenta para reconocer la indemnización, lo que supondría la inexistencia de hechos modificativos de la decisión legal de haberle negado el reconocimiento pensional.

Solicitó se mantengan los argumentos del A quo, y por ende, se confirme la sentencia de primera instancia.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de sobrevivientes, causación, aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, **I)** si el afiliado fallecido ARTURO BALLESTEROS OSPINA, dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de

sus eventuales beneficiarios, **II)** y si la demandante MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS logró acreditar los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la prestación económica que por esta acción judicial reclama, **III)** y solo en caso afirmativo pasará la sala a establecer la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, la procedencia de los intereses moratorios y la indexación de las condenas.

Para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, atendiendo la fecha del fallecimiento del afiliado.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a **i)** la muerte del afiliado ARTURO BALLESTEROS OSPINA, insuceso acaecido el 25 de mayo de 2003, y **ii)** el vínculo matrimonial con la demandante MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS que data del 26 de junio de 1965, hechos que se prueban con los registros civiles de defunción y matrimonio visibles a folios 27 y 29 del expediente.

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar el primer problema jurídico planteado, esto es, si este afiliado BALLESTEROS OSPINA dejó causado o no el derecho pensional en favor de sus eventuales beneficiarios, al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado, veamos:

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento...**”

Teniendo en cuenta la densidad mínima de cotizaciones exigida en el citado precepto legal, esta Sala procedió a revisar la HISTORIA LABORAL del

afiliado, obrante a folios 65 al 68 del plenario, encontrando que el señor ARTURO BALLESTEROS OSPINA tenía en su haber 0 semanas cotizadas entre el 25 de mayo de 2000 y el 25 de mayo de 2003, esto es en los 3 años anteriores a su deceso. Acredita un total de **547,71 semanas** cotizadas entre el 1º de enero de 1967 y el 30 de junio de 1977, evidenciándose que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 llevaba más de 16 años sin cotizar en pensiones.

En ese orden de ideas, podría decirse que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y por ello se pasará a estudiar, si este derecho se causó en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa que se solicita en la alzada.

El principio de la condición más beneficiosa

Frente al tema, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido el criterio de aplicación del principio de condición más beneficiosa, explicando que, al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal, es decir, que no es dable emplearla con un carácter indefinido.

Ha explicado la Corte que, en los casos en que la contingencia (en este caso la muerte) acontece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y se pretende la aplicación de dicho principio no resulta admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pasado en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Esta tesis ha venido sosteniéndose, refrendándose y reiterándose por la Sala Laboral de la Corte en las sentencias rad. 32.642 del 9 de diciembre de 2008, SL7275-2015, SL7205-2015, SL6362-2015 y la SL4650-2017 – con radicación N° 45.262 del 25 de enero de 2017.

En esta última providencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que solo era posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, para garantizar y proteger, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. Estimó la Corte que no podía pasarse por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

En el caso concreto, de acuerdo con el criterio jurisprudencial abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si bien el fallecimiento del causante se dio antes de la expiración de los primeros tres años de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, ya que el deceso ocurrió el 25 de mayo de 2003, cerca de 4 meses después de haber entrado a regir dicha ley, no resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa conforme a las exigencias del Decreto 758 de 1990, incluso por razones disímiles a las esbozadas por el A quo, conforme pasa a exponerse:

El juez de primera instancia, si bien hizo referencia al test de procedencia fijado por la Corte Constitucional a través de la sentencia SU 005 de 2018, estimó que en el caso concreto no era siquiera necesario realizarlo al encontrarnos frente a un desaparecimiento de la presunta vulnerabilidad económica de la demandante, ya que con su muerte –ocurrida en el curso del juicio- ya no existía sujeto de derechos qué proteger constitucionalmente.

No obstante, más que encontrar en el hecho de la muerte de la demandante un relevo para verificar si conforme a la tesis de la jurisprudencia constitucional se cumple o no con las circunstancias para dar el salto normativo y aplicar al sub judice el Decreto 758 de 1990, esta sala encuentra necesario revisar si se cumple o no con el mismo, en tanto, si bien la demandante ha fallecido el 18 de febrero de 2018, no puede pasarse por alto que el derecho se está reclamando conforme a las circunstancias que regían para el 25 de mayo de 2003, fecha del fallecimiento del causante, y la apelación formulada por el apoderado judicial de la demandante apunta a destacar que se cumple con esas exigencias.

Debe decirse en principio que, si bien el órgano de cierre en la especialidad laboral es la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Tribunal no desconoce la tesis que de manera simultánea, ha venido sosteniendo la CORTE CONSTITUCIONAL frente al principio de la condición más beneficiosa, en innumerables sentencias, donde ha expresado su criterio frente al tema, sosteniendo que, no solo la norma pensional vigente (Ley 797 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990) puede aplicarse a una solicitud de pensión de sobrevivientes, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último antes de expirar su periodo de vigencia. (Ver entre otras las sentencias T-401 de 2015, T-464 de 2016, T-084 de 2017, T-235 de 2017, T-294 de 2017 y T-378 de 2017, criterio jurisprudencial del que solicita su aplicación la parte recurrente, toda vez que afiliado fallecido registra en su historia laboral con más de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994 (547,71 semanas), satisfaciendo así la densidad mínima de cotizaciones que otrora exigía los arts. 6° y 25 del acuerdo 049 de 1990.

En la sentencia **SU-005 de 2018**, la Corte Constitucional realizó un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, introduciendo un **TEST DE PROCEDENCIA** que permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de

sobrevivientes, por lo que se establecieron cinco condiciones para poder superar el test de procedencia, a saber:

Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.
Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

De estas exigencias puede decirse que con la prueba testimonial depuesta por los testigos Ruby Ballesteros Bedoya, Gustavo de Jesús Giraldo García y Sergio Iván Ríos Grajales, respectivamente hija y nueros de la señora demandante, se evidencia que solo se cumplen algunas de las exigencias del referido test.

En efecto, de una valoración integral de la prueba testimonial puede decirse que solo se cumplen con relativa suficiencia las condiciones segunda y tercera, referidas a que, en el caso concreto la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes afectaría satisfacción de necesidades básicas, al evidenciarse que la señora demandante dependía económicamente de su esposo, y por ende dicha prestación sustituiría el ingreso que aportaba el causante a la beneficiaria. La exigencia primera, que hace referencia a

supuestos fácticos de analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento, puede decirse que se acredita por la vejez.

Sin embargo, resulta llamativo el claro incumplimiento a la condición cuarta, evidenciándose igualmente incumplimiento a la exigencia quinta.

Y es que se observa en la historia laboral del causante (fl. 65), que las 547,71 semanas que alcanzó a reunir en toda su vida laboral, se cotizaron entre el 1º de enero de 1967 y el 30 de junio de 1977; es decir que para el 25 de mayo de 2003 fecha de la muerte del causante, llevaba cerca de 26 años sin cotizar al sistema. Este aspecto no resulta ser de poca monta de cara al principio de solidaridad a virtud del cual la Corte Constitucional estructura el análisis de la procedencia del salto normativo de Ley 797 de 2003 a Decreto 758 de 1990 en la Sentencia SU-005 de 2018 y establece como exigencia del test de procedencia que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.

Ahora, advierte la sala que, conforme a la prueba testimonial de los tres testigos arrimados al debate por la activa, amplios conocedores de la dinámica familiar dado su parentesco de consanguineidad y afinidad, que no existe ninguna justificación que evidencie que el señor ARTURO BALLESTEROS OSPINA se encontraba en imposibilidad de cotizar al sistema pensional. En efecto, fueron claros los deponentes en manifestar que el mencionado señor continuó laborando en el campo de manera ocasional, dedicado al trabajo de su propia huerta en su predio, condición que muestra que no tuvo ningún interés en continuar aportando al sistema pensional a efectos de consolidar la densidad suficiente para acceder a las prestaciones de la seguridad social o dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional en favor de sus beneficiarios.

El argumento que presenta el apoderado judicial de la activa, consistente en que bajo las reglas de la experiencia es usual advertir que los empleadores del campo usualmente no afilian a sus trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones, no es absoluto y no denota una regla de verificación fáctica

insoslayable. Se trata de una afirmación relativa que no constituye ningún axioma de certeza, lo cual aunado a las condiciones laborales tanto como dependiente como independiente que tuvo el actor, se constata que se marginó por completo del sistema pensional desde junio de 1977.

La anterior circunstancia impide que se aplique la condición más beneficiosa en este caso al no cumplirse la exigencia cuarta del test, adicionalmente incumpléndose con la exigencia quinta, ya que no puede establecerse que la accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que el fallecimiento ocurrió en el año 2003 y solo vino a reclamar el derecho el 22 de diciembre de 2015, interponiendo incluso de manera extemporánea el recurso de reposición en contra del acto administrativo que le negó el reconocimiento, según se lee en el encabezado de la Resolución GNR 119840 del 25 de abril de 2016, recibiendo el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.

Es por lo anterior que esta Sala confirmara el sentido absolutorio de la sentencia de primer grado, pero por las consideraciones aquí expuestas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la desventura del recurso de apelación formulado por la activa, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de los sucesores procesales de la señora MARÍA CELINA BEDOYA DE BALLESTEROS, y a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de CIEN MIL PESOS M/L (\$100.000).

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, pero por las razones aquí expuestas la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocida.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de los sucesores procesales de la demandante y a favor de la demandada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de CIEN MIL PESOS M/L (\$100.000).

TERCERO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 071 del 28 de abril de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>